

First Submitted: 15 January 2025 Accepted: 27 April 2025

DOI: <https://doi.org/10.33182/y.v6i1.3503>

Resistencia y lucha territorial: la política contenciosa de las comunidades frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (2018-2024)

Gualberto Díaz González¹ y Julio César Urbina Bustamante²

Resumen

Este artículo examina el conflicto entre el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y las comunidades de la región. La investigación, fundamentada en el enfoque de política contenciosa, demuestra que, contrario a las promesas de desarrollo, las comunidades experimentan procesos de despojo territorial y exclusión en la toma de decisiones que amenazan su patrimonio biocultural. La metodología implementada integra revisión hemerográfica, entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, observación participante y registros de etnografía audiovisual que documentan las experiencias locales (trabajo de campo realizado de noviembre de 2023 a diciembre de 2024). Este abordaje metodológico permitió profundizar en la comprensión de las resistencias comunitarias frente al CIIT y las estrategias desarrolladas ante las imposiciones estatales y del capital privado. El análisis se sustenta en las teorías de movimientos sociales para examinar los procesos de organización y movilización en defensa de los derechos sociales y territoriales. Se destaca el papel de la UCIZONI y la APIIDTT como actores fundamentales en la defensa territorial. Concluimos que estas luchas por la defensa del territorio trascienden la mera supervivencia para constituirse en actos de reivindicación de derechos, estableciendo un referente para otros movimientos sociales que enfrentan las consecuencias del capitalismo global en sus territorios.

Palabras clave: Política contenciosa, Corredor Interoceánico, Movimientos sociales, Resistencia y lucha territorial.

Resistance and Territorial Struggle: The Contentious Politics of Communities in the Face of the Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec (2018–2024)

Abstract

This article examines the conflict between the Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec (CIIT) megaproject and the communities of the region. Grounded in a contentious politics approach, the research demonstrates that, contrary to promises of development, communities are experiencing processes of territorial dispossession and exclusion from decision-making that threaten their biocultural heritage. The methodology employed integrates a review of press materials, semi-structured interviews with community leaders, participant observation, and audiovisual ethnography records documenting local experiences (fieldwork conducted from November 2023 to December 2024). This methodological approach allowed for a deeper understanding of community resistance to the CIIT and the strategies developed to counter state and private capital impositions. The analysis draws on social movement theories to examine the processes of organization and mobilization in defense of social and territorial rights. The study highlights the role of UCIZONI and APIIDTT as key actors in territorial defense. We conclude that these struggles for territorial defense go beyond mere survival, constituting

¹ Universidad Veracruzana (UV). Correo electrónico: guadiaz@uv.mx

² Universidad Veracruzana (UV). Correo electrónico: juliurbina@uv.mx



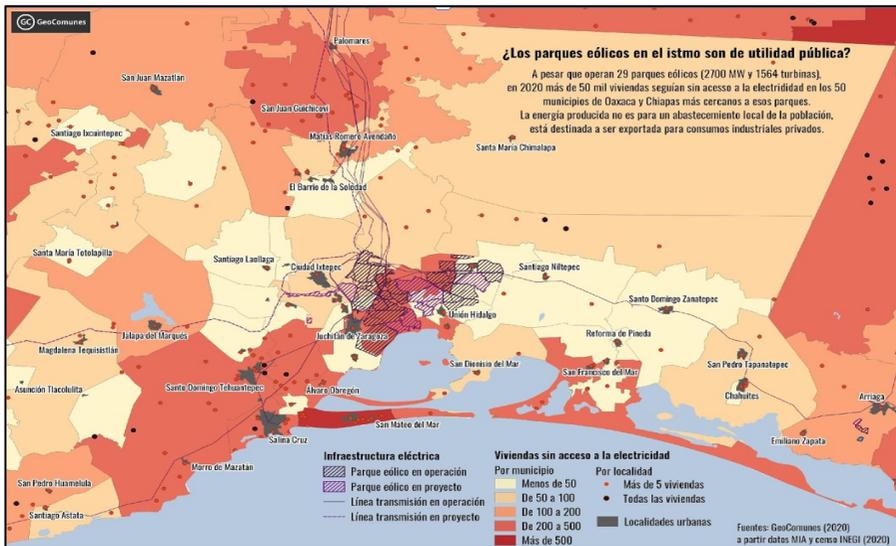
acts of rights reclamation that set a precedent for other social movements confronting the consequences of global capitalism in their territories.

Keywords: Contentious politics, Interoceanic Corridor, Social movements, Resistance and territorial struggle

Introducción

Las teorías de los movimientos sociales se han centrado en los procesos de organización por la defensa de los derechos sociales y culturales. Con el Neoliberalismo, las formas de organización se reinventaron una y otra vez, ahora por la defensa de la vida o la defensa del territorio. Los zapatistas de Chiapas marcaron la agenda emancipatoria en los años noventa y, a principios del siglo XXI, los movimientos socioambientales colocan la crisis civilizatoria por el cambio climático y el neoextractivismo en el centro de sus demandas, al evidenciar cómo estos fenómenos no solo intensifican la degradación ambiental, sino que también profundizan las desigualdades sociales, culturales y económicas. Un ejemplo de esto es que la política neoliberal trajo a las comunidades del Istmo de Tehuantepec los parques eólicos de capital privado, volviéndose un paisaje industrial yuxtapuesto caracterizado por los aerogeneradores que tapizan los valles de La Ventosa (Imagen 1.). En este sentido podemos decir que hubo y, hay, resistencias y organización comunitaria frente a la embestida continua del capital privado transnacional; luchas de larga data defienden el territorio y la cultura en esta región. Por ello y ante el arribo del megaproyecto actual en la región, es pertinente preguntarse ¿cuáles son las preocupaciones de las comunidades con la llegada del CIIT?

Imagen 1. Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.



Fuente: Geocomunes (2020)

La inconformidad colectiva provoca el nacimiento del movimiento social o la construcción de sujeto colectivo que afronta retos, moviliza recursos e impulsa avances democráticos. Los movimientos sociales buscan restablecer agravios, implementar políticas o una forma de gobierno, pero siempre bajo el peligro de desaparecer por el poder del Estado o por grupos



de interés. La democracia avanza con los movimientos sociales, el reconocimiento de derechos humanos y no humano; la lucha es por la vida y contra cualquier forma de imposición, reaprendiendo saberes y sentido de comunidad. (Melucci, 1999; Touraine 1997; Wallerstein, 2007; Tilly, 2010; De Sousa, 2009; 2012; Quijano, 2001: 11; Espinosa, 2015)

El neoliberalismo acentuó la acumulación por despojo y la penetración del capital en territorios *vaciados*, zonas de marginación, empobrecidas y desorganizadas, por lo tanto, criminalizables si fueran una amenaza para la circulación del capital. En Latinoamérica, la defensa del territorio se ha centrado en los últimos años en el combate a los diferentes procesos extractivos, como la minería, la defensa del medio ambiente y las luchas por el agua (Svampa, 2010). Y lo decolonial se presenta como una alternativa al postextractivismo y a la crisis del modelo civilizatorio. Ante las formas estatales y capitalistas de organización social, Escobar (2014) recupera lo relacional y lo comunal que se encuentra en las luchas populares de grupos como los zapatistas en Chiapas y las comunidades autónomas de Oaxaca, que han buscado alternativas de vida bajo la lógica de lo comunal, la defensa de la vida y los territorios desde una confrontación ontológica contra la modernidad que impone un mundo único a expensas de muchos otros mundos posibles; los movimientos sociales en América Latina buscan transformar los territorios en espacios de vida y resistencia frente a la modernidad capitalista.

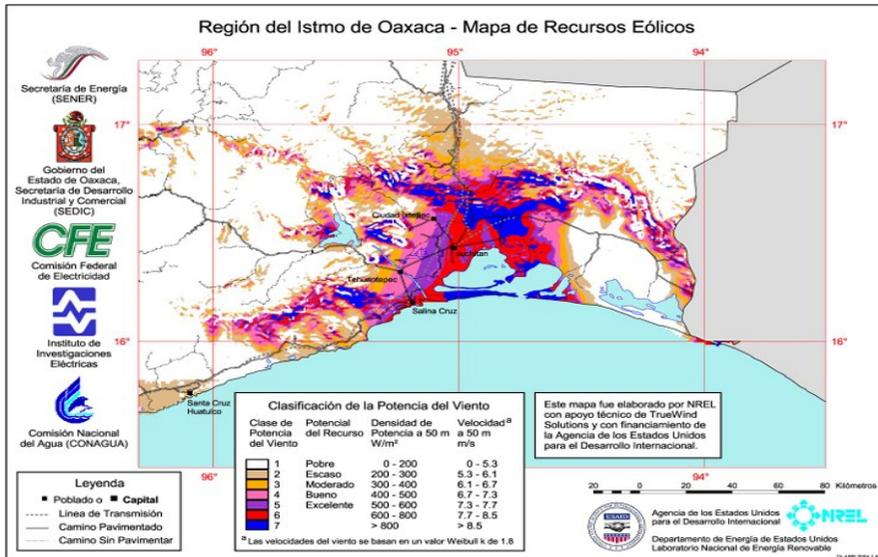
En el Istmo oaxaqueño las luchas son antiguas, vienen desde los zapotecas y su resistencia a ser conquistados por los españoles, conservaron sus lenguas y su cultura. Sin pretender ir tan lejos, durante los últimos 50 años ¿qué tenemos en términos de movimientos sociales en la región del Istmo de Tehuantepec? Varios momentos importantes, sin duda, han configurado la geografía regional en términos políticos y sociales. En los años setenta, la COCEI en Juchitán llegó al gobierno municipal; en los ochenta se crea en San Juan Guechicovi la UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec) que busca combatir el caciquismo, luchar por los derechos de los pueblos indios y apoyar la resistencia a los megaproyectos. En los noventa, el levantamiento zapatista revitaliza el movimiento indígena nacional y la UCIZONI participa en la fundación del Consejo Nacional Indígena.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) surge en 2006 como una respuesta del magisterio disidente ante el autoritarismo del gobernador Ulises Ruíz Ortiz. La APPO tuvo su epicentro en el plantón que se instaló en el centro de la ciudad de Oaxaca, pero su influencia se extendía a muchos pueblos y comunidades del valle y de la sierra. La Sección 22 del magisterio jugó un papel importante en aquel levantamiento popular que puso en jaque al estado mexicano y, que finalmente reprimió con la intervención de la policía y el ejército; pero la semilla de la autodeterminación de los pueblos había sido sembrada en el Istmo.

El discurso neoliberal de extracción y despojo incentiva la generación de energía limpia y los bonos verdes. Los valles y sus vientos resultan atractivos para el capital (imagen 2.). Las resistencias de comunidades oaxaqueñas a los parques eólicos se remontan a 2007 con la creación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIID'TI), que surge para apoyar a las comunidades en resistencia por eólicas y los procesos de despojo de sus tierras. Se trata de organizaciones históricas que se agrupan hoy con organizaciones locales y redes latinoamericanas para defender el territorio en tiempos de la 4T. Los procesos parecen similares en cuanto a las facilidades para la circulación de mercancías, pero no así para el desarrollo de la mayoría de los pueblos y comunidades,

asoladas por los tiempos de crisis e inseguridad. Para la delincuencia organizada también el CIIT es atractivo y, por lo tanto, crucial para el trasiego de droga y el control de las rutas comerciales.

Imagen 2. Mapa de recursos eólicos.



Fuente: Elliot *et al.* (2004).

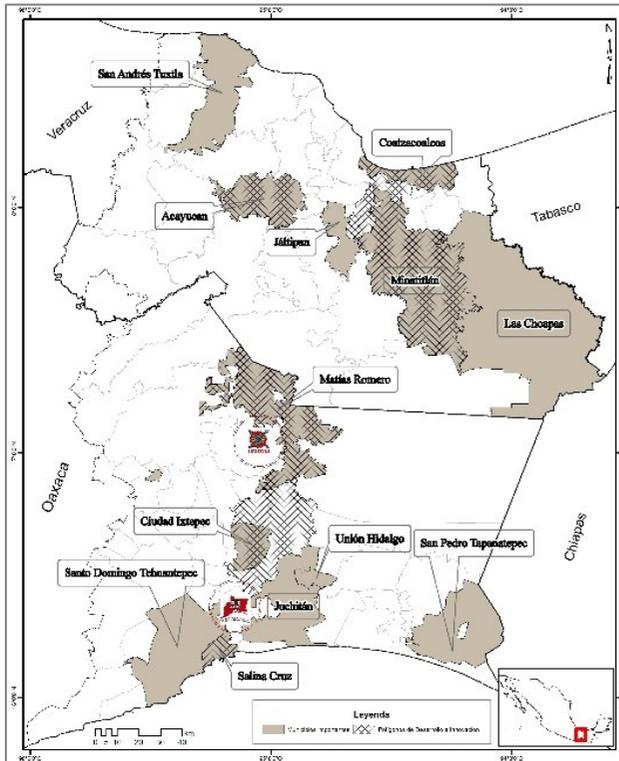
El Istmo, una mirada socio-histórica

La región del Istmo mexicano está integrada principalmente por los estados de Oaxaca y Veracruz (aunque también abarca partes de Chiapas y Tabasco). Entre los municipios más importantes se encuentran: Coatzacoalcos, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Jáltipan de Morelos, Las Choapas, Acayucan, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, Unión Hidalgo, San Pedro Tapanatepec y Ciudad Ixtepec.

El Istmo es una región fragmentada y compleja, impactada por dinámicas agrarias, por la influencia de la industrialización, el papel de los grupos indígenas y los proyectos de desarrollo estatal (Velázquez et al, 2009). Desde el contexto geográfico e histórico, está situado entre los océanos Atlántico y Pacífico, y ha sido objeto de proyectos de desarrollo desde la época colonial, con la intención de aprovechar su valor estratégico como punto de conexión transoceánica. Desde el contexto regional, a pesar de los esfuerzos estatales, el Istmo no se ha consolidado como una región integrada, sino como un espacio de múltiples tensiones y fragmentaciones entre sus vertientes norte (Veracruz) y sur (Oaxaca). Y desde las políticas económicas, proyectos como el ferrocarril, la explotación petrolera y más recientemente los megaproyectos de infraestructura han generado conflictos entre las comunidades locales y el Estado, destacando la resistencia indígena y campesina. Los proyectos nacionales a menudo ignoran las dinámicas locales, contribuyendo a la exclusión y el despojo de comunidades indígenas y rurales (Velázquez et al., 2009)



Imagen 3. Mapa del Istmo de Tehuantepec.



Fuente: Elaboración propia con base en el AGEM de INEGI, (2024) y el PDIT 2020-2024.

En la época colonial esta región estaba integrada por zapotecas, mixes, huaves y mixtecos en lo que corresponde al área sur, y en la zona norte por olmecas, popolucas y nahuas, con una densidad poblacional baja, lo que propició la migración para mano de obra. En aquellos primeros años de la colonia surgieron movimientos en contra de las estructuras de poder:

Las humillaciones que las autoridades nativas recibían de sus amos españoles, a su vez, sólo concitaba el resentimiento y el desprecio del pueblo común hacia las primeras, como se puso de manifiesto durante la rebelión que nos ocupa: los indios de Tehuantepec reaccionaron con igual violencia contra los españoles y algunas autoridades indígenas, y en Nexapa y otra zonas arremetieron en primer lugar contra los indios que servían al español (autoridades u otros con la colaboradores oficiosos, como los intérpretes o nahuatlatos. Los zapotecos, quienes encabezaron el movimiento, hoy apoyados en una poderosa fuerza -compuesta también por miembros de otros grupos istmeños- lograron mantener durante más de un año el control de la región (Díaz-Polanco, 2022, Pp. 48-51).

La rebelión se caracteriza como la búsqueda de un equilibrio entre la sociedad india y la sociedad española a partir del reconocimiento de la renovada jerarquía india. El movimiento indígena tenía por objetivo mejorar la relación interétnica en lo económico (eliminar prácticas comerciales españolas) y en político (evitar que los alcaldes interfirieran en las elecciones de las autoridades nativas). Solo con negociación fue posible apaciguar las rebeliones en el Istmo de Tehuantepec.

Desde el punto de vista de la geografía política, el Istmo de Tehuantepec contiene las partes australes de los estados de Veracruz y Oaxaca. Se forma en su porción norte de lo que hasta inicios del siglo XX eran los cantones de Acayucan y Minatitlán Veracruz y de los distritos de Tehuantepec y Juchitán Oaxaca en la parte sur (Zarauz, 2018, p. 26).

El ferrocarril transístmico fue un evento que vino a apuntalar la agricultura al facilitar la exportación de productos:

La importancia geopolítica y comercial del istmo de Tehuantepec surgió en principio por su ubicación estratégica, al constituir el istmo más septentrional del continente americano, y por la posibilidad de establecer la comunicación entre los océanos Atlántico y pacífico y con ello la ruta comercial entre Europa y oriente. Hernán Cortés había visualizado establecer una ruta al oriente a través de esta vía. Por ello, el conquistador ordenó las primeras exploraciones de la región y de los ríos navegables en busca de una posible comunicación y así lo manifestó al rey de España (Zarauz, 2018, Pp. 46-47).

El proyecto de comunicación transoceánica fue abandonado y retomado hacia finales de la colonia. En el año 1773, el virrey Bucareli autorizó la partida de Agustín Cramer. Posteriormente, encargó una exploración adicional al ingeniero Miguel del Corral y al capitán Joaquín Aranda (de octubre de 1776 a julio de 1777). El proyecto del tren transístmico no se completó hasta la era porfirista, aunque con dificultades. El 15 de octubre de 1894, se construyó un tren de 310 km que conectaba el golfo de México con el Pacífico. Sin embargo, debido a problemas en las vías, no se pudo usar hasta 1906. La extracción de petróleo ayudó a dinamizar la productividad económica a través del empleo, el aumento de la población, las migraciones y la integración demográfica para la región.

Por aquella época, en materia económica, las principales actividades eran la agricultura (caña de azúcar) y la ganadería, actividades que estaban acaparadas por empresas transnacionales. A finales del siglo XIX, la disminución de la producción de cultivos comerciales se debió al descenso de los precios internacionales y del consumo y a la implementación de nuevos aranceles protectores en Estados Unidos, lo que generó inestabilidad en la exportación de azúcar, caña, arroz, maíz, café, los cuales se producían en el Istmo.

Este espacio experimentó rebeliones a pesar del apoyo de amplios grupos al régimen. Con el ascenso de Huerta y el asesinato de Madero en Oaxaca, vino el restablecimiento del porfirismo y los privilegios de los lugareños en la administración pública. Las bases ideológicas revolucionarias y las modificaciones legislativas de la nueva Carta Magna provocaron una reacción negativa del capital extranjero y de los gobiernos de México. Hubo corrientes de lucha en contra del carrancismo, como las movilizaciones de Francisco Villa y Emiliano Zapata, cuyos ideales de reparto agrario, mejoras laborales y democracia local, expresados en la convención de Aguascalientes, eran más radicales que las propuestas del carrancismo. Para las regiones del istmo los movimientos más relevantes fueron:

...el soberanista en Oaxaca, los mapaches en Chiapas, el levantamiento de Félix Díaz y el de los Peláez en la huasteca. El asunto del “Territorio del Istmo” demostraba el surgimiento de élites locales, con intereses económicos (como el usufructo de las salinas, la especulación territorial con el paso transoceánico, etc.) Y políticos bien claros, que además serán capaces de enfrentar las disposiciones del centro político estatal (Oaxaca) o vincularse a las causas políticas nacionales y utilizarlas para sus fines. Asimismo, hoy el separatismo demostró ser



una causa popular, por ser expresión de rechazo a la política centralizadora y a las restricciones económicas (Zarauz, 2018, p. 204).

El ferrocarril interoceánico que conectó el Golfo de México con el Pacífico seguía siendo un proyecto importante. Durante la década de 1930, el gobierno promueve su desarrollo como estrategia para el comercio y el transporte. Durante la Segunda Guerra Mundial y en el período de posguerra, México experimentó un proceso de industrialización y en el Istmo de Tehuantepec comenzaron los cambios de infraestructuras y proyectos de modernización para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se implementaron en varios países como una estrategia para fomentar el desarrollo económico en regiones marginadas. En México, estas zonas nacieron con el objetivo de reducir desigualdades regionales y atraer inversiones extranjeras. Las ZEE son áreas delimitadas en las que se ofrecen incentivos fiscales, aduaneros y administrativos para el desarrollo industrial y económico, “fueron diseñadas como un motor para la atracción de inversión privada, la generación de empleos y el desarrollo de infraestructura en regiones rezagadas” (Martínez, 2019, p. 45).

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) en México define a éstas como áreas delimitadas geográficamente que operan bajo un régimen especial establecido en la Ley. Estas zonas pueden estar conformadas por una o varias secciones, que incluyen conjuntos industriales. El territorio donde se ubicaría una ZEE necesitaba cumplir con ciertos criterios: i) estar en una de las diez entidades federativas con mayores niveles de pobreza extrema; ii) localizarse en áreas estratégicas con facilidad de integración y potencial de conectividad hacia mercados nacionales e internacionales; iii) enfocarse en sectores productivos acordes con las ventajas comparativas y la vocación económica de la región; y iv) estar en municipios con una población que oscile entre 50,000 y 500,000 habitantes. (Banco de México, 2018).

En México, estas zonas fueron creadas en 2016 bajo la administración de Enrique Peña Nieto, centrándose en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con la esperanza de reducir la brecha económica entre el norte y el sur del país. Regiones priorizadas: Puerto Chiapas (Chiapas), Coatzacoalcos (Veracruz), Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán-Guerrero) y Salina Cruz (Oaxaca) (Imagen 4.). Posteriormente, se incluyeron municipios de Tabasco y Campeche. Los incentivos serían las exenciones fiscales (ISR, IVA), infraestructura de calidad, régimen aduanero especial y simplificación administrativa. Pero estas zonas enfrentaron problemas como falta de inversión privada significativa, burocracia y un contexto político desfavorable. Harvey explica que este tipo de iniciativas suelen enfrentar desafíos relacionados con el “capitalismo territorializado”, donde los intereses económicos globales no siempre se alinean con las necesidades locales (Harvey, 2005, p. 102).

Por ejemplo, un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que *"la falta de infraestructura y la inseguridad en las regiones seleccionadas limitaron significativamente la capacidad de las ZEE para cumplir sus objetivos"* (IMCO, 2018, p. 17). En 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el programa de las ZEE.

Imagen 4. Las Zonas Económicas Especiales de México.



Fuente: Secretaría de Economía (2016).

Del periodo neoliberal

El neoliberalismo surgió como la nueva ortodoxia económica en el capitalismo a finales de los años 70. Para Harvey (2021), el modelo responde a las crisis del capitalismo global y se presenta como la solución a los problemas que le aquejan. Fue en el último cuarto del siglo XX el avance hacia el centro de la escena política la doctrina neoliberal, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, promovido por la Universidad de Chicago y el Instituto de Asuntos Económicos de Londres, lo que marca un punto de inflexión en la gobernanza económica mundial, aunque las formas y los modos de implementación de política neoliberal varió según el contexto. En Chile, el régimen de Pinochet instauró el neoliberalismo mediante la coerción estatal, mientras que Margaret Thatcher, en el Reino Unido, utilizó mecanismos democráticos para implementar un programa radical a favor de la privatización y el capital privado.

El estado neoliberal tiene la capacidad de adaptación a contextos políticos diversos para restaurar el poder de clase y asegurar la acumulación, procurando un entorno favorable para los negocios sin importar las consecuencias negativas para el bienestar social, con la implementación de políticas que priorizan los intereses privados sobre los derechos laborales y una creciente precarización, exclusión y aumento de la desigualdad. Además, el estado neoliberal es hostil a cualquier forma de solidaridad, como las protestas o los movimientos sociales, por lo que minar la solidaridad colectiva es clave para el ascenso de esta doctrina que fragmenta a la clase trabajadora, debilita su capacidad de resistencia, socava procesos democráticos y favorece el gobierno de las élites económicas mediante decretos ejecutivos y resoluciones judiciales, protege los intereses del capital financiero y reconfigura las relaciones entre los estados y los mercados. “Sin embargo, lo ha hecho a costa de la solidaridad social y el bienestar de millones de personas en todo el mundo”. (Gasca, 2019, Pp. 19-20)

La formulación de políticas con el modelo primario-exportador y el ingreso de divisas para financiar el crecimiento, como la minería, los hidrocarburos, la producción de alimentos



agrícolas y ganaderos, recursos forestales, entre otros, insertaron a América Latina en el mercado internacional y contribuyeron a reproducir un patrón de acumulación desigual con distintos niveles de especialización e impulso temporal de las regiones con determinados productos exportables (Gasca, 2019).

El escenario de una economía volcada al exterior no fue del todo favorable porque distintas regiones y ciudades quedaron excluidas de los circuitos económicos debido a las condiciones desiguales respecto a los niveles de productividad, equipamiento o infraestructura, y a los rezagos históricos regionales, especialmente en el sur y sureste de México. La resistencia de las comunidades indígenas a los megaproyectos responde a los “intereses del gran capital por apropiarse de los beneficios derivados de la explotación de la riqueza natural, excluyendo a los pobladores nativos” (Velázquez et al., p. 38).

Panorama de la inseguridad en el Istmo

El fenómeno de la violencia en México durante los últimos años ha ido en aumento y abarcando casi todas las regiones del país. El sur de Veracruz ha sido complicado por la ampliación del crimen organizado, pero la violencia en el istmo ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en un fenómeno que impacta profundamente la vida de sus habitantes y la estructura social de la región. La violencia está intrínsecamente vinculado a la lucha por el control del territorio entre diversos cárteles del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con grupos delictivos locales que operan bajo intereses caciquiles. También está vinculada a la pérdida de la industria y la apuesta por la extracción del petróleo y su refinamiento para la generación de energía.

La tasa de homicidios en la región ha aumentado significativamente en los últimos años, en gran medida debido a la guerra entre cárteles. Las ejecuciones se han vuelto comunes, muchas veces como resultado de la disputa por el control de rutas de trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. Por ejemplo, el homicidio del exdiputado Juan Carlos Molina Palacios, vinculado al CJNG y la precariedad de la protección política que algunos de ellos solían disfrutar (Infobae, 2020).

La región sur de Veracruz es un punto crítico para el robo de combustible, particularmente a lo largo del poliducto Minatitlán-Salina Cruz. Grupos del CJNG y el CDS han estado involucrados en este ilícito, que no solo afecta la economía local, sino que también financia sus operaciones criminales. La lucha por el control de estas actividades ha generado enfrentamientos violentos entre cárteles y bandas locales (Mayen, 2024).

El trasiego y la venta de diferentes tipos de drogas, principalmente metanfetaminas, cocaína y marihuana, son actividades predominantes en la región. Los cárteles luchan por el control de las rutas que conectan a las costas de Jalisco con el Istmo de Tehuantepec, vitales para el tráfico hacia el norte del país y, eventualmente, hacia Estados Unidos. La reciente introducción de células del CDS en la región, que se habían considerado previamente ausentes, ha alterado la dinámica del tráfico de drogas, intensificando la competencia con el CJNG (Cano, 2023).

La extorsión de comerciantes y empresarios es otra manifestación de la violencia. Los grupos delictivos, ya sean del CJNG, CDS o células independientes, imponen “derechos de piso”, lo que agrava la situación económica y genera un ambiente de miedo y desconfianza entre la población. La implementación de tácticas violentas, como el incendio de negocios y el uso de

la violencia física, exacerba la crisis de seguridad (estado 20, 2024; EDUCA, 2024). Con la proximidad de la frontera sur, la zona también se ha convertido en un corredor para el tráfico de migrantes. Las organizaciones criminales se benefician de la desesperación de muchas personas que buscan cruzar hacia el norte, lo que a menudo resulta en extorsiones y abusos, así como en un aumento de los desaparecidos en la región (Noticias Oaxaca, 2024).

Grupos independientes y caciques locales que históricamente han ejercido control sobre ciertos territorios, muchas veces colaboran con los cárteles para mantener su poder, lo que a su vez perpetúa un ciclo de violencia. La complicidad de algunos funcionarios públicos y autoridades locales, que a veces están directamente involucrados o en contubernio con estos grupos criminales, agrava aún más la situación. La incapacidad del Estado para hacer frente a esta violencia ha resultado en un vacío de poder que los cárteles han sabido explotar, lo que hace que la lucha por el control territorial sea aún más sangrienta y destructiva.

El sur de Veracruz y Oaxaca se enfrenta a una crisis de violencia resultado de la lucha por el control del narcotráfico, el robo de hidrocarburos y otros delitos (Jiménez, 2024, Crail, 2024). La complicidad de actores políticos y de seguridad pública, junto con la creciente influencia de los cárteles, ha creado un entorno donde la criminalidad se ha vuelto endémica. El interés de cárteles como el CJNG y el CDS por controlar esta zona no solo responde a la necesidad de asegurar rutas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales, sino también al valor económico que representa el Corredor Interoceánico y la infraestructura en desarrollo. Estos proyectos, lejos de fortalecer las capacidades locales de desarrollo, han atraído la atención de grupos criminales, exacerbando los conflictos y desplazando aún más a las comunidades. El narcotráfico en el Istmo no solo es un desafío de seguridad, sino una manifestación de las contradicciones de un modelo de desarrollo que privilegia el capital sobre las personas, dejando a su paso una estela de violencia, exclusión y vulnerabilidad.

Política contenciosa

La interacción colectiva de actores que plantean demandas que afectan intereses de otros, a menudo dirigiéndose contra el gobierno, es la política contenciosa, donde la organización colectiva desafía restricciones impuestas por el Estado o las élites. El concepto de política contenciosa se desarrolla a partir de los movimientos sociales de los 60 y 70, las protestas estudiantiles y los movimientos por los derechos civiles, identificando cuatro componentes: las oportunidades políticas, las estructuras de la movilización, los marcos culturales y los repertorios de la contienda.

En la década de 1990, McAdam propuso examinar los mecanismos causales que generan la acción contenciosa, incluida la participación del gobierno como objeto o parte de las demandas. La contienda puede ser contenida o transgresora, donde los actores políticos son reconocidos y reducen la posibilidad de violencia, y la transgresora es ejercida por actores emergentes que utilizan métodos innovadores o prohibidos, incrementando el riesgo de violencia. La disrupción puede ser breve, pero, si no se controla, puede escalar hacia lo racial. Un elemento central es la contención violenta por parte del Estado, que puede llevar a la radicalización de las acciones colectivas y generar una espiral de violencia que tiende a ser limitada en alcance y duración. Los mecanismos de la represión son esenciales para entender cómo una movilización pacífica puede transformarse en un conflicto violento.



La política contenciosa y su relación con la movilización violenta, problematiza la noción de que toda movilización implica violencia o amenaza, pero hay que separar del marco interpretativo de movilización la asociación intrínseca de protesta y violencia, que ha sido usado para deslegitimar las protestas vistas como intentos de desestabilización política. Las movilizaciones responden a demandas sociales legítimas en contexto socio-históricos situados. El uso de la violencia depende de factores contextuales y del desarrollo específico de cada acción colectiva. Los movimientos sociales se han manifestado pacíficamente o de manera disruptiva, pero resaltan los casos en donde la movilización logra cambios sustantivos sin recurrir a la violencia.

El análisis causal de McAdam (1990), Tilly (2010) y Tarrow (2012) se basa en identificar mecanismos que permiten entender los procesos de contienda. El enfoque es útil porque descompone fenómenos complejos en componentes manejables, pero no hay que ignorar la dimensión subjetiva o simbólica de las movilizaciones, como la construcción de identidad o legitimidad entre los actores. Las movilizaciones en contextos democráticos modernos deberían canalizarse pacíficamente dentro de los marcos institucionales del Estado.

Protesta social en el corredor del Istmo

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, en 2018 como presidente, anunció una de sus diez prioridades: el megaproyecto del Corredor Interoceánico en la zona del Istmo de Tehuantepec. En la página oficial³ se expone que el proyecto consolidará el desarrollo integral, sustentable, sostenible e incluyente en el Istmo de Tehuantepec, a través de prestación de servicios de administración portuaria, interconexión mediante transporte ferroviario y demás actividades que concreten el desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec y en las áreas de influencia, a fin de que genere un crecimiento económico e integral para la población desde el ámbito social y cultural. La línea K (Iztepec, Oaxaca, Ciudad Hidalgo, Chiapas y límites con Guatemala), comenzó a operar a partir de julio de 2024.

El corredor Interoceánico es histórico. Las ciudades de Salina Cruz y Coatzacoalcos se fundaron a raíz de la construcción de ambos puertos en la época de Porfirio Díaz. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec fue inaugurado oficialmente el 23 de enero de 1907. Sesenta trenes corrían diariamente en el cruce interoceánico para llevar y traer mercancía del Pacífico hacia la costa este de los Estados Unidos. Pero las operaciones del Canal de Panamá en 1914 desvalorizaron la zona como ruta Interoceánica y se abandonó el proyecto. El auge que traía el tren del Istmo fue seguido de un periodo de crisis económicas y de políticas sociales, hasta que se canceló la posibilidad de desarrollar la región (Rodríguez, 2024).

Ahora el CIIT de la 4T tiene como objetivo instrumentar una plataforma logística multimodal que integre la prestación de servicios de las administraciones del sistema portuario nacional Coatzacoalcos S.A. de C.V., Salina Cruz S.A. de C.V., Dos Bocas S.A. de C.V. y Puerto Chiapas, S.A. de C.V., y su interconexión mediante transporte ferroviario, por conducto del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., así como adquirir, desarrollar, fraccionar, comercializar, concesionar, adjudicar y, en su caso, enajenar los inmuebles que integran su patrimonio, que permita llevar a cabo el establecimiento de los polos de desarrollo para el bienestar, con base en las vocaciones productivas que se determinen para los polígonos

³ <https://www.gob.mx/ciit/documentos/programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec-2020-2024>

correspondientes de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, que fomente el crecimiento económico, productivo y cultural. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) genera expectativas de derrame económico con una proyección a futuro para las zonas por donde pasa el tren que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

La evaluación participativa realizada por Hernández et al. (2024) analiza los impactos ambientales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en San Juan Guichicovi, Oaxaca. A través de talleres, cuestionarios y mapeo comunitario, el estudio examinó las repercusiones ambientales y sociales desde la perspectiva de la comunidad local.

Los resultados revelaron deficiencias significativas en el proceso de implementación del proyecto. Se identificó la ausencia de una participación efectiva y consulta previa con las comunidades afectadas. En el ámbito ambiental, se documentaron impactos directos como deforestación, fragmentación de ecosistemas y deterioro de recursos hídricos. La biodiversidad local sufrió alteraciones considerables, manifestadas en la disminución de poblaciones de flora y fauna, incluyendo especies en riesgo de extinción.

En la dimensión socioeconómica, el proyecto ha generado afectaciones a las actividades agrícolas tradicionales, ha restringido la movilidad local y ha debilitado las estructuras de organización comunitaria. Destaca particularmente que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) omitieron el conocimiento tradicional de la población sobre los ecosistemas y la agrobiodiversidad local. La investigación concluye enfatizando la necesidad fundamental de incorporar a las comunidades en los procesos de evaluación ambiental, como mecanismo esencial para salvaguardar su biodiversidad, territorio y derechos humanos.

La UCIZONI

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) se ha destacado como un referente en la defensa de los derechos indígenas en Oaxaca y en México desde los ochenta. A sus cuarenta años de existencia, la organización ha luchado contra el caciquismo, el despojo de tierras y la implementación de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, amenazan la cultura y el territorio de los pueblos indígenas. La perseverancia a sus principios originales le ha permitido estar de pie y con independencia. Mientras que otras organizaciones fueron cooptadas o debilitadas, la UCIZONI se ha mantenido como una voz de resistencia en la región, defendiendo la autonomía y los derechos de los pueblos zapotecas y mixes. En un contexto donde el poder estatal y económico suele absorber o eliminar a los movimientos sociales, la permanencia de Ucizoni refleja compromiso y fortaleza ante las presiones externas.

La UCIZONI ha participado activamente en la construcción de un movimiento indígena nacional e internacional. Desde el primer Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas en 1989 hasta su involucramiento en el Congreso Nacional Indígena y la Campaña Continental de los 500 Años de Resistencia. La organización ha vinculado su lucha local con movimientos más amplios por la justicia y la autodeterminación de los pueblos indígenas en América Latina, que comprenden que la opresión no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema colonial y capitalista que afecta a comunidades indígenas en todo el continente.

También ha estado en contra de megaproyectos en la región, como el Corredor Transístmico, el Plan Puebla-Panamá y diversos proyectos eólicos, iniciativas que fueron presentadas como oportunidades de desarrollo, pero que son vistas por la organización como amenazas al modo



de vida y al entorno de los pueblos indígenas, proyectos que truncan la posibilidad de los pueblos indígenas de determinar su futuro, imponiéndoles un modelo de desarrollo ajeno a sus valores y necesidades. Los pueblos originarios necesitan estructuras organizativas que puedan conducir la resistencia y mantener el horizonte de justicia y autodeterminación. En este sentido, la UCIZONI se presenta como una luz en tiempos de incertidumbre y presión sobre las comunidades en una región marcada por el caciquismo y la imposición de megaproyectos. Su capacidad de articulación con otros movimientos y de permanecer leal a sus convicciones, la convierten en un símbolo de lucha para los pueblos indígenas en México.

Los parques eólicos

Los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec comenzaron a desarrollarse en la década de 1990. La región del istmo es conocida por sus fuertes vientos y un lugar propicio para la generación de energía eólica. Desde entonces, ha habido un crecimiento significativo en la instalación de parques eólicos en la región y en aprovechar el potencial eólico para la generación de energía renovable. La primera central eoloelectrónica en el istmo de Tehuantepec, y también en México, se instaló en el ejido La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 1994. Conocida como La Venta I, la central se equipó con siete aerogeneradores del fabricante danés Vestas. El proyecto fue licitado por la CFE bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF) (Hernandez, J. y Leon, G, 2014).

La necesidad de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, llevó a un creciente interés por las energías renovables, como la eólica. La energía eólica es una fuente de energía limpia que no emite dióxido de carbono durante su operación. En el año 2000, el gobierno de Oaxaca, con el respaldo del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), organizó un coloquio internacional para promover las oportunidades de inversión en energía eólica en la región, especialmente dirigido a inversores extranjeros. El *Coloquio Internacional sobre Oportunidades para el Desarrollo Eoloelectrónico de la Ventosa, Oaxaca*, atrajo a las principales empresas eólicas a nivel mundial. Ediciones posteriores en los años 2001, 2002 y 2004, ahora bajo el nombre de *Coloquio Internacional sobre Oportunidades para el Desarrollo Eoloelectrónico del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec*,⁴ se centraron en identificar y superar barreras para la implementación de proyectos, preparando el terreno para la llegada de grandes compañías eólicas. El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec fue parte de un proyecto ambicioso para convertir la región en una ruta comercial y de comunicación interoceánica. En 2006, se inició la construcción de la central La Venta II, de 83.3 MW, en terrenos del ejido La Venta, a cargo de la CFE y adjudicada a las empresas españolas Iberdrola y Gamesa mediante licitación, con una inversión de 112.5 millones de dólares. Este proyecto marcó el comienzo de la llegada de empresas transnacionales que actualmente dominan la explotación del recurso eólico en el Istmo de Tehuantepec.

Entre 2008 y 2012 se construyeron siete centrales eólicas privadas para autoabastecimiento, sumando una capacidad total instalada de 668 MW. En ese mismo periodo, se erigieron cinco centrales de Pequeña Producción de Energía (PIE), junto con una de pequeña producción, que agregaron 516 MW de capacidad instalada y 1,699 GWh/año de generación. Algunas de las principales empresas privadas inversoras en los proyectos eólicos del Istmo son: la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana Fondo de Infraestructura MacQuaire, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas

⁴ <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/104.pdf>

Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS y las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras (Grieta, s/f).

Los efectos ambientales de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec dependen de las características específicas del sitio de emplazamiento. Aunque la mayoría de los proyectos se han instalado en tierras de uso agrícola y ganadero, minimizando en principio el impacto en los ecosistemas locales, se señala que hay repercusiones en el suelo que afectan las actividades agropecuarias. Un aspecto relevante es el riesgo de colisión de aves y murciélagos con los aerogeneradores. El istmo es un importante corredor de aves migratorias. La tasa de mortalidad de aves migratorias podría superar los estándares de las centrales eólicas, siendo La Venta II un posible sumidero de población, lo que podría afectar a otras especies al aumentar el número de aerogeneradores (Rojas, 2012). Aunque las afectaciones podrían ser limitadas para una sola central, se advierte que la instalación simultánea de miles de aerogeneradores en la región amplificará los impactos.

Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente el 25 de octubre de 2011, denunciando amenazas e intentos de agresiones a defensores de derechos humanos en Unión Hidalgo (La coperacha, 2019). El 21 de octubre, alrededor de 50 trabajadores de una empresa de parques eólicos llegaron a tierras de la comunidad indígena zapoteca. Testigos informaron que los trabajadores amenazaron e insultaron a los miembros de la comunidad. Un expolicía empleado de la empresa amenazó a la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez con quemarla y matarla, mientras que a Maribel González (otra defensora), la amenazaron de muerte. Cuatro hombres, supuestamente guardias de seguridad de la empresa, golpearon a Arquímedes Gómez, un maestro local que había estado apoyando a la comunidad (PBI, 2011).

Organizaciones de la sociedad civil en México denuncian la falta de diálogo entre una empresa y los propietarios de tierras en Unión Hidalgo. En un comunicado de prensa, el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, junto con otras organizaciones como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), reclaman que la empresa ha mantenido reuniones solo con autoridades y aún no ha establecido un diálogo con los habitantes locales.

El 28 de octubre de 2011, se produjeron enfrentamientos en La Venta. Según la UCIZONI un grupo de golpeadores y policías liderados por el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago, intentó desalojar violentamente un bloqueo realizado por campesinos para evitar la extracción de material de sus tierras destinado a la construcción de más parques eólicos. En el enfrentamiento, una persona del grupo agresor resultó muerta y veinte personas, en su mayoría campesinos opositores al proyecto eólico, resultaron heridas, algunas de gravedad (Navarro, 2011).

A continuación, se presenta una tabla que concentra las principales movilizaciones llevadas a cabo en el istmo durante los últimos años y reportadas por algún medio local o nacional:



Tabla 1. *Movilizaciones en el CIIT.*

Movilizaciones en el CIIT				
MUNICIPIO	ORGANIZACIONES	DEMANDAS	TIPO DE MOVILIZACION	
Salina Cruz (2022-2023)	Petroleros jubilados Comités de defensa de la 4T, Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Movimiento Antorchista, grupo de campesinos	Seguridad en comunidades indígenas, contrataciones a despídos ICAFLUOR, justicia a feminicidios	Marchas, bloqueos de carreteras que conectan con Salina Cruz, bloqueo de calles	Detenciones, desalojo forzado de bloqueos por parte de grupos armados
Juchitán de Zaragoza, La Ventosa, Puente Madera (2012-2023)	Pobladores de La Ventosa, organizaciones agrarias, COCEI Nueva Generación, Despierta Juchitán, UCIZONI Asamblea del Istmo de la Tierra y Defensa del Territorio	Destitución de la titular de la Secretaría de Movilidad, problemas de agua potable, audiencia con el gobierno estatal, apoyo de viveres, empleos y medicamentos a población vulnerable, no al despojo de tierras	Bloqueos de las principales carreteras, marchas, plantón en lugares estratégicos y plantones en vías del tren	Desalojo forzado de los bloqueos en las vías del tren por parte del ejército, detención forzada, amenazas
Matias Romero, Donají, estación de ferrocarril (2012-2023)	Ejidatarios de Palomares, la UCIZONI, habitantes de Tolosita, miembros de la caravana para la liberación de presos políticos	Suspensión de los trabajos del CIIT por afectaciones en arroyos, respeto a las comunidades, educación superior, información, justicia ante asesinatos	Marchas, caravanas, bloqueos de carreteras y plantones en vías del tren	Desalojo forzado de los bloqueos en las vías del tren, detención forzada, amenazas
Ciudad Ixtepec (2016-2023)	Movimiento MULT, alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), Comité de Defensa del Territorio Ixtepecano	Incumplimiento de acuerdos con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, paz en la región Triqui, justicia para los asesinados, rechazo a la minería	Marchas, bloqueos de carreteras, plantones, toma de caseta	Marchas, desalojo forzado, detenciones forzadas.
Santo Domingo Tehuantepec (2010-2023)	UCIZONI, comunidades mixes, zoques y zapotecos, Frente Popular Revolucionario, Regional Indígena en Defensa por la Vida, Ejidos Mixes de Piedra Blanca	Respeto a los pueblos, alto a la represión, persecución y acoso administrativo, justicia por feminicidios, visibilizar el despojo del Sur-sureste, derecho a ser informados sobre el CIIT	Marchas y bloqueos de carreteras	Desalojo, amenazas de muerte, intimidaciones, detenciones

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión hemerográfica (2018-2024).

Hay un estudio que analizó los efectos de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico del sur del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con énfasis en la implementación de parques eólicos. La investigación reveló que, contrario a las expectativas iniciales de mejora en las condiciones de vida de la población local, los beneficios económicos han sido marginales y no han contribuido a un desarrollo sostenible en la región. Identificaron una marcada asimetría en la distribución de beneficios: mientras las empresas transnacionales concentran las ganancias generadas, las comunidades locales enfrentan limitaciones significativas en el acceso a recursos, tecnologías y conocimientos. Esta disparidad se ve agravada por la deficiente integración de factores de desarrollo endógeno, particularmente en tres aspectos fundamentales: la participación efectiva de actores locales, la transferencia tecnológica y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo económico regional (Lancaster *et al.*, 2020).

La APIIDTT

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT) es una organización comunitaria que está integrada por asambleas y autoridades indígenas tradicionales y agrarias; ha impulsado la organización y la resistencia civil en el Istmo frente a las altas tarifas de la energía eléctrica y formando parte de procesos organizativos a escala federal. En 1994, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló la primera central eólica del país en La Venta, Juchitán, ante esto mucha gente se inconformó porque nadie les preguntó si querían plantas eólicas en sus territorios, y cuando se dieron cuenta que se les estaban robando sus tierras los mega proyectos, en el año 2007 la población creó la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, y en el 2009 adquiere el nombre de la

APIID'TT, para impulsar procesos de resistencia comunitaria a los megaproyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec (Flores, 2020).

La APIID'TT tiene un papel central en la resistencia a los despojos, la destrucción de ecosistemas, la corrupción y la ruptura del tejido social provocada por los parques eólicos privados y la CFE. Sus líneas de acción y organización son la tierra y el territorio (indígena-agrario); asambleas y autoridades tradicionales; reconstitución y fortalecimiento de bienes comunales; resistencia y lucha contra megaproyectos. Acción: resistencia civil frente a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica; reconocimiento de la energía como un derecho humano; autonomía energética/comunitaria. Derechos humanos, acompañamiento y observación; equipo jurídico interdisciplinario; asesoría legal. Mujeres y disidencias sexo genéricas: Concejo de Mujeres Autónomas; acompañamiento en Violencia de Género; colaboración @Oaxatrans. Procesos Productivos: Lapa Guie' Cooperativa Artesanal; Cooperativa Milpa-Salud y autocuidado; Rusianda' Cooperativa de Salud Natural y Tradicional. Capacitación (Educación): centro de educación y capacitación comunitaria; Escuelita de la Tierra; farmacia Viva; Unidad de Aprendizaje Comunal. Comunicación: apropiación tecnológica; radios comunitarias; cooperativa audiovisual. Aquí participan la Red Pueblos y Energía, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, el Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California, Comuneros de Ciudad Ixtepec en Defensa del Territorio, el Consejo Maya del Poniente Chikin' Já y ejidatari@s de las comunidades mayas de Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún y Kinchil (Yucatán), el Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), la Red Nacional de Resistencia Civil (RNRC), la RED Futuros Indígenas el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), El Istmo es Nuestro (Campaña Global) y EL SUR RESISTE (Caravana, Encuentro y Campaña Global).⁵

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIID'TT) encabeza una significativa resistencia contra el megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, representando a las comunidades indígenas binnizá (zapotecas) e ikoots (huaves). Este movimiento confronta iniciativas de energías renovables que, si bien se presentan bajo una retórica de sustentabilidad y mitigación del cambio climático, perpetúan esquemas de despojo propios del capitalismo neoliberal. Los impactos del proyecto abarcan múltiples dimensiones: alteraciones territoriales y ambientales profundas, desplazamiento de actividades productivas ancestrales como la pesca y la agricultura, desarticulación del tejido social comunitario, y procesos de fragmentación que generan desigualdades económicas. Además, las comunidades enfrentan exclusión en los procesos decisorios y criminalización de sus movimientos de resistencia.

En este contexto, la APIID'TT se ha consolidado como un actor fundamental en la defensa del territorio y la identidad cultural. A través de mecanismos asamblearios de decisión y estrategias jurídicas, la organización contrapone dos visiones antagónicas: por un lado, la perspectiva mercantilista del llamado capitalismo verde, y por otro, una cosmovisión comunitaria centrada en la autonomía y autodeterminación. Como señala Flores (2020), esta lucha territorial trasciende la mera resistencia física para constituirse en una batalla cotidiana

⁵ <https://tierrayterritorio.wordpress.com/quienes-somos/>



y cultural que integra demandas por la autonomía, el reconocimiento identitario indígena y el derecho a la gestión colectiva del territorio.

El 17 de junio de 2021 se llevó a cabo en la comunidad de San Blas Atempa un panel donde se reflexionaron riesgos, peligros y amenazas que los Megaproyectos representan para la tierra, el agua y los territorios de los pueblos indígenas habitantes del Istmo de Tehuantepec. El 20 de septiembre de 2021, los integrantes de la APIIDTT anunciaron uno de sus más recientes triunfos legales: un amparo en contra de la construcción, en tierras comunales, del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa francesa EDF (Hernández, 2021). Durante la caravana El Sur Resiste, integrantes de APIIDTT fueron objeto de intimidación y acoso por parte del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso importante posterior fue la criminalización de David Hernández Salazar, defensor de derechos humanos e integrante de esta asamblea. Esta persecución se originó por su participación en dos frentes: 1) la defensa del derecho territorial de la Comunidad Indígena Binnizá de Puente Madera y 2) su oposición a la construcción del Parque Industrial del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en tierras comunales el Pitayal; proyecto que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Al respecto él no señaló:

La comunidad de Puente Madera desde el 2017 ha tenido una lucha de defensa de la tierra y territorio. Recordamos que desde el 2017 impusieron una subestación eléctrica que según la SEDENA quería implementar en tierras comunales o en tierras de uso común de San Blas Atempa, y pues formamos parte de San Blas Atempa. Entonces fue en el 2017 cuando empezaron a construir la base de la subestación en tierras de uso común y explotaron un cerro, el cerro ibú, fueron más de 5 mil volteos de material pétreo para relleno. Desde ahí nos opusimos nosotros a esa explotación, desde ahí empieza la criminalización hacia nosotros como defensores de la tierra.

A finales del 2020, yo como agente municipal recibo una invitación del entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, de aquí de San Blas Atempa, y me platica sobre ese proyecto del Corredor Interoceánico, y que dentro de ese proyecto vienen polos de desarrollo, y que uno de esos polos de desarrollo, me dice él, que lo gestionó a través de una relación que tiene con los empresarios para que se ubicara en San Blas Atempa, en específico en lo que es la sierra de uso común del monte del pitayal. Tuvimos esa plática en septiembre del 2020. Se llevó un proceso de supuestos posesionarios que surgieron a la llegada de este polo de desarrollo y, en 350 hectáreas, surgieron varios posesionarios en tierras que nunca habían sido ocupadas y que han servido a esta comunidad y a las otras agencias comunitarias de aquí de San Blas: para la extracción de leña, la cacería, el pastoreo, ha sido espacio común para todas las comunidades.

Somos en total 17 compañeros que tienen orden de aprehensión por defender el monte del pitayal. A mí el año pasado me detienen iniciando el año y me trasladan a Tanivet, en la ciudad de Oaxaca, por el delito de quema de vehículos, de incendio y daños a terceros. Ese mismo día me vinculan a proceso y me permiten llevar el juicio en libertad, inician las audiencias y el desahogo de pruebas inicia el 16 de febrero con los testimoniales. Eran 13 testimoniales que no coincidieron en sus declaraciones porque criminalizaron esa lucha y criminalizaron a los 17 compañeros, señalándome a mí como el que incitaba a quemar los carros, señalándome a mí que ordenaba que los matara y, bueno, yo era el principal de lo que estaba sucediendo. Hubo contradicción entre ellos, pero al final de cuentas sabemos que detrás de todo hay intereses económicos muy grandes, no nada más nacionales sino internacionales, y quizá eso mueva a los gobiernos a manipular un poco lo que es la parte de la fiscalía y a esa parte del poder judicial. Tengo una sentencia de 46 años de prisión, una multa de 186 mil pesos y una

reparación de daños de 1 millón 100 mil pesos. (Entrevista a David Hernández Salazar, mayo de 2024).

El caso de Puente Madera en San Blas Atempa, Oaxaca podría ilustrar el estado actual de la resistencia en el Istmo. Esta comunidad era uno de los últimos reductos de movilización y oposición real a la implementación de los parques industriales en la región. La presión debió ser mucha, pero San Blas Atempa cedió las tierras de uso común del monte el Pitayal a cambio del retiro de las órdenes de aprensión:

Aquí se va a instalar uno de los 10 polos de desarrollo que forman parte del corredor interoceánico. Aquí en estas tierras de uso común, que durante muchos años han sido ocupadas por las comunidades indígenas, pues ahora sí ya es un hecho que va el polo de desarrollo de San Blas Atempa. Valoramos la integridad de los 17 compañeros que contaban con órdenes de aprensión, y por seguridad de ellos y de la comunidad, se tomaron acuerdos que van desde la cancelación de las carpetas de investigación y las órdenes de aprensión, y a cambio nos piden que nosotros desistamos del amparo que habíamos ganado por la vía indígena sobre estas tierras de uso común. Esa fue la condición del gobierno federal para que nosotros cedieramos nuestras tierras para el proyecto del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa. Pero también tenemos que señalar que San Blas Atempa es un municipio grande de 19 mil habitantes, junto con todas sus agencias, y Puente Madera es una comunidad de 700 habitantes que defendió el derecho sobre las tierras de uso común, y que, a nivel regional del Istmo de Tehuantepec, Puente Madera fue la única comunidad de todo el municipio que mostró resistencia en defender sus tierras. Todo eso fue valorado y llegamos a desistir del amparo y la marina ya tomó posesión de estas tierras de uso común de San Blas Atempa (Entrevista con David Hernández, diciembre de 2024).

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio constituye un referente fundamental en la defensa de los derechos territoriales en el Istmo de Tehuantepec. Su resistencia organizada ante megaproyectos como los parques eólicos y el Corredor Interoceánico evidencia la determinación de las comunidades por preservar no solo sus tierras, sino sus formas de vida tradicionales. En un entorno marcado por la criminalización de la protesta social y la violencia estructural, esta Asamblea ha trascendido la mera defensa territorial para consolidarse como un movimiento que reivindica la autodeterminación de los pueblos y la justicia social. El caso emblemático de Puente Madera ilustra cómo las decisiones comunitarias enfrentan sistemáticamente presiones desde múltiples ámbitos: económico, político y legal. La APIIDTT representa así (probablemente) una visión del mundo fundamentada en principios de sostenibilidad, equidad y comunidad. Su lucha se ha convertido en un paradigma para los movimientos indígenas y sociales que confrontan los impactos del capitalismo global en las comunidades locales.

Reflexiones finales

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se configura como un megaproyecto que, bajo la promesa de desarrollo y modernización, ha generado significativas tensiones y conflictos en las diversas comunidades de la región. Estas comunidades han enfrentado procesos sistemáticos de despojo territorial y exclusión en la toma de decisiones, situación que ha comprometido la preservación de su territorio y patrimonio cultural. Este escenario evidencia la necesidad de analizar la política contenciosa como mecanismo de articulación de demandas y resistencias frente a un proyecto que soslaya derechos históricos fundamentales.



La manifestación de la política contenciosa se materializa en la organización y movilización de las comunidades indígenas ante las imposiciones estatales y del capital privado. La UCIZONI y la APIIDTT han consolidado un marco de resistencia que trasciende la mera defensa territorial para reivindicar la autodeterminación y la justicia social. Lo que permite comprender la intersección entre las luchas territoriales y las demandas por el reconocimiento de derechos culturales y sociales, en un contexto de inseguridad y caracterizado por la criminalización sistemática de la protesta social.

Se observa que, pese a la trayectoria histórica de resistencia y organización, el avance del CIIT ha encontrado una oposición limitada y focalizada en los bastiones históricos de organización social en la región, lo cual plantea interrogantes sobre la efectividad de las acciones colectivas contemporáneas. La ausencia de procesos de consulta y los mecanismos de despojo territorial emergen como ejes centrales del descontento social, evidenciando la complejidad inherente a la política contenciosa en estos contextos. El estudio de las interacciones entre actores sociales y Estado, así como el análisis de las estructuras de movilización, resultan fundamentales para comprender la dinámica de estas luchas en un entorno marcado por la violencia estructural y la represión institucional.

Finalmente hay que señalar la relevancia de la política contenciosa como instrumento de articulación de demandas y resistencias de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec frente al CIIT. La defensa del territorio y la cultura constituye una lucha por la supervivencia y un acto de reivindicación de derechos que confronta las narrativas oficiales que minimizan la resistencia. La experiencia histórica de estas comunidades se erige como testimonio de la capacidad de organización y movilización en la búsqueda de justicia social, constituyéndose en un paradigma para otros movimientos sociales que enfrentan los impactos del capitalismo global en sus territorios.

Referencias

- Cano, J. (2023, junio 18). Por qué el CJNG busca controlar el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, según las autoridades. *Infobae* <https://www.infobae.com/mexico/2023/06/18/por-que-el-cjng-busca-controlar-el-istmo-de-tehuantepec-en-oaxaca-segun-las-autoridades/>
- Crail, A. (2024, octubre 13). Violencia, el mal que crece a la par del megaproyecto. *El Universal*. <https://interactivos.eluniversal.com.mx/2024/corredor-interoceanico-imposicion-despojo-violencia/corredor-interoceanico-violencia-crece/>
- Díaz-Polanco, H. (2022). *El gran incendio. La rebelión de Tehuantepec*. México: Fondo de Cultura Económica.
- EDUCA. (2024, noviembre 7). Caravana Divino Niño denuncia desaparición de diez migrantes a su paso por el Istmo de Tehuantepec. *EDUCA* <https://www.educaoxaca.org/caravana-divino-nino-denuncian-desaparicion-de-diez-migrantes-a-su-paso-por-el-istmo-de-tehuantepec/>
- Elliot, D., Schwartz, M., Scott, G., Haymes, S., Heimiller, D., George, R. *Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca*. U.S. Department of Energy.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. UNAULA, Colombia.
- Espinosa, S. (2015). *Identidad y otredad en la teoría decolonial de Aníbal Quijano*. Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
- Estado 20. (2027, junio 27). Homicidios, amenazas, agresiones físicas: la violencia tras el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. *Estado 20* <https://www.estado20.com/estado/homicidios-amenazas-agresiones-fisicas-la-violencia-tras-el-corredor-interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec/>
- Flores, R. M. (2020). El Istmo de Tehuantepec en disputa: El camino de la Asamblea de Pueblos del Istmo frente al expansionismo de las energías renovables. *Revista Movimientos*, 4(2), 98-118.

- García, Y. (2019). Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec: un cúmulo de irregularidades. En Bastian, A., y Jairath, V. (Coord.), *Conflictos y Resistencias: energía y conflictividad socioambiental en México*. (Pp. 241-275). Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Porrúa.
- Gasca, J. (2019). Medio siglo de políticas de desarrollo regional en América Latina y México. En Gómez, P. y González, F. (Coord.), *Desafíos en América Latina: miradas desde la geografía*. (Pp. 19-40). Ediciones y Gráficos Eón.
- Geocomunes. (2020). *El corredor eólico. Neocolonialismo energético para el abastecimiento industrial*. En https://geocomunes.org/Diaporamas/GeoComunes_Megaproyectos_Istmo.pdf
- Grieta. (S/F). Parques Eólicos. *Grieta Medio Para Armar*. <https://www.grieta.org.mx/index.php/parques-eolicos/>
- Harvey, D. (2021). *Espacios del capitalismo global. Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual*. España: Akal.
- Harvey, D. (2005). *El nuevo imperialismo*. Akal.
- Hernández, F. (2021, septiembre 20). Comunidad en Juchitán gana suspensión contra parque eólico de EDF. *Energía Hoy*. <https://energiahoy.com/2021/09/20/comunidad-en-juchitan-gana-suspension-contra-parque-eolico-de-edf/>
- Hernández, (2011, noviembre 1). Molinos de viento: el rostro del despojo. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2011/11/01/opinion/021a1pol>
- Hernández, J. y León, G. (2014). Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, *Problemas del Desarrollo*, México. https://www.google.com/search?q=cuando+llegaron+los+parques+eolicos+a+el+istmo+de+tehuantepec&rlz=1C1UEAD_esMX1076MX1076&coq=cuando+llegaron+los+parques+eolicos+a+el+istmo+de+tehuantepec&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYOAEyBggAEEUYO'TIHCAEQIRigAdIBCTEO0TYwajBqOagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Hernández, B. E., Vázquez-Quesada, B., Vázquez-Barrios, V., Bracamontes Nájera, L., & Benítez Keinrad, M. (2024). *Evaluación participativa de impacto ambiental: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en San Juan Guichicovi, Oaxaca, México. Sociedad y Ambiente*, 27, 1-31. <https://doi.org/10.31840/sya.v2024i27.2857>
- Infobae. (2020, septiembre 04). Atraparon en Guanajuato al “Compa Playa”, acusado del asesinato de diputado del PRI en Veracruz. *Infobae* https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/04/atraparon-en-guanajuato-al-compa-playa-acusado-del-asesinato-de-diputado-del-pri-en-veracruz/?utm_source=chatgpt.com
- Jiménez, X. (2024, octubre 10). Extorsión y robo de hidrocarburos ahorcan a Veracruz. *MILENIO*. <https://www.milenio.com/estados/extorsion-y-robo-de-hidrocarburos-ahorcan-a-veracruz>
- La Coperacha. (2019, junio 18). Lanzan Acción Urgente ante amenazas a defensores del territorio en Oaxaca. *La Coperacha*. <https://lacoperacha.org.mx/lanzan-accion-urgente-amenazas-defensores-territorio-oaxaca/>
- Lancaster, E., Martínez Prats, G., & Mapen, F. de J. (2020). *Región del Istmo de Tehuantepec: ¿Un caso de desarrollo económico local?* Publicaciones e Investigación, 14(2), 1-15. <https://doi.org/10.22201/fcpys.16658140e.2017.48.57685>
- López, F. (2022). Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni): 37 años de lucha. *Revista de Estudios Jurídicos*, No. (70). <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17198/17663>
- Mayen, B. (2024, septiembre 12). Por qué Veracruz es un estado clave para el CJNG y su red de huachicoleo. *Infobae* <https://www.infobae.com/mexico/2024/09/12/por-que-veracruz-es-un-estado-clave-para-el-cjng-y-su-red-de-huachicoleo/>
- Melucci, A. (1999). “Teoría de la acción colectiva” en *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México.
- Noticias Oaxaca. (2024, noviembre 20). Logra Fiscalía de Oaxaca vinculación a proceso y prisión contra dos personas extranjeras por secuestro agravado de 71 personas migrantes en el Istmo de Tehuantepec. *Noticias Oaxaca* <https://www.noticiasenoaxaca.com/logra-fiscalia-de-oaxaca-vinculacion-a-proceso-y-prision-contra-dos-personas-extranjeras-por-secuestro-agravado-de-71-personas-migrantes-en-el-istmo-de-tehuantepec/>
- Olmos, B. (2015). *Los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec y el desarrollo regional*. AMECIDER, México. <https://ru.iiec.unam.mx/2870/1/Eje3-189-Olmos.pdf>



